

Publicación en una revista de los datos relativos a afiliados a un partido político.  
Informe 0382/2005

La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la publicación de los nombres y apellidos de las personas que hayan solicitado su afiliación al partido consultante en su órgano oficial de comunicación, divulgado en soporte papel, con una tirada aproximada de 13.000 ejemplares y en soporte electrónico, accesible desde la página web del partido. En particular, se indica que los solicitantes manifiestan expresamente su voluntad de afiliarse, mediante la firma de la solicitud de afiliación, y que dicha hoja no prevé la publicación de los datos, sin perjuicio de que los Estatutos del partido si prevén esa circunstancia.

Como punto de partida, debe indicarse que los datos referentes a los interesados que hayan solicitado su afiliación al partido consultante o que de hecho se encuentren afiliados al mismo, han de ser necesariamente considerados como datos especialmente protegidos, relacionados con la ideología de los interesados, siendo en consecuencia de aplicación lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual, “sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias”.

Esta norma será aplicable en principio con independencia de que el tratamiento o cesión se realice en el entorno o fuera del ámbito del Partido Político correspondiente. Únicamente cabrá excepcionar la misma en el supuesto contemplado en el propio precepto, en que se indica que “Se exceptúan los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados o miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del afectado”.

Dicho lo anterior, podría plantearse si el supuesto objeto de la consulta podría considerarse encuadrado en la excepción prevista por el mencionado artículo 7.2.

Como se ha indicado, la habilitación efectuada por el precepto se refiere, en lo que a este caso interesa, a los ficheros mantenidos por los propios partidos políticos y referidos a sus afiliados. En consecuencia, la Ley habilita el tratamiento sin previo consentimiento de los datos relacionados con la ideología política de los afectados únicamente en caso de que el mismo sea directamente efectuado por el Partido político en cuestión, lo que en la

interpretación más extensiva podría incluir a sus órganos de gobierno y representación. Sin embargo, dicha habilitación no comprendería en ningún caso a los tratamientos que impliquen un conocimiento o acceso de los datos por terceras personas, como sucedería en el presente supuesto, en que la publicación de los datos en el órgano de comunicación del partido y, aún en mayor medida, en su sitio web implicará una cesión de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

Así, es claro que en el supuesto planteado no podría operar la excepción a la que se refiere el artículo 7.2, toda vez que el mismo, en su inciso final establece tajantemente que en todo caso “la cesión de dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del afectado” que, como se indica en la Ley habrá de ser “expreso y por escrito”, dada la especial naturaleza de los datos a los que se está haciendo referencia.

En el caso que nos ocupa, la solicitud de afiliación al Partido consultante indica simplemente, según se señala en la consulta, la mera voluntad de dicha adhesión, lo que en el mejor de los supuestos habilitaría el tratamiento de los datos a los efectos previstos en el ya citado artículo 7.2. No obstante, será preciso que el afiliado fuera asimismo informado acerca del tratamiento de sus datos por el partido consultante, en los términos establecidos en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

Por este motivo, la cesión a la que se refiere la consulta no tendría cobertura en las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, dado que la misma, al encontrarse sometida al régimen especial previsto para los datos de ideología por el artículo 7.2 debería contar con el consentimiento previo y expreso del afectado, lo que no sucede en este caso.

Sin perjuicio de lo que se acaba de indicar, cabría plantearse si la cesión pudiera considerarse derivada de la propia condición de afiliados de los afectados, que pudiera justificar el conocimiento de sus datos personales por quienes accedan al órgano de comunicación del partido, en formato impreso o electrónico, dado lo dispuesto en los Estatutos del partido.

Esta cuestión debería, no obstante rechazarse dado que la única excepción prevista en la Ley a la prestación del consentimiento se encontraría amparada en la excepción, reiteradamente mencionada, prevista en el artículo 7,2 de la Ley Orgánica, que se refiere exclusivamente al tratamiento efectuado por el propio partido político y no al que pudieran efectuar los afiliados o integrantes del mismo, como ya se ha indicado.

Ciertamente los Estatutos prevén la publicación a la que se refiere la consulta, pero de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 se desprende que, a

diferencia del tratamiento o cesión de datos no especialmente protegidos, es decir, no incluidos en su artículo 7, en que dichos tratamiento o cesión pueden ampararse en causas distintas del consentimiento, el legislador ha considerado que el tratamiento o cesión de aquellos datos que afectan de una forma más directa a las convicciones políticas, religiosas o filosóficas de la persona vaya vinculado directamente y de forma exclusiva a la obtención de su consentimiento que, además, y a diferencia e lo que sucede en otros supuestos, habrá de ser “expreso y escrito”, con pleno conocimiento de las circunstancias que rodean el tratamiento o cesión concreta.

De este modo, la mera mención estatutaria de la publicación no resulta en modo alguno suficiente para justificar la inserción de los datos en dicha publicación, salvo si se cuenta con el consentimiento expreso y por escrito de los interesados.

En consecuencia, la publicación de los datos de los solicitantes de la afiliación al partido consultante en el órgano de comunicación del partido, tanto en su formato impreso como en el electrónico, exigirá contar con el consentimiento expreso y escrito de los mismos, que deberá obtenerse previa información a aquéllos de los extremos contenidos en el artículo 5.1, con expresa indicación de la mencionada difusión y de sus consecuencias.

Precisamente, respecto de dichas consecuencias, es preciso señalar que los argumentos que se han sostenido hasta este lugar serán igualmente aplicables al tratamiento de los datos referidos a la ideología de los solicitantes de la afiliación que pudiera derivarse del hecho de encontrarse estos recogidos en una publicación periódica o en un sitio web.

En este sentido, si bien los artículo 6.2 y 11.2 b) de la Ley Orgánica habilitan, como regla general, el tratamiento y cesión de los datos contenidos en fuentes accesibles al público, siendo tales los medios de comunicación social, tal y como dispone el artículo 3 j) de la propia Ley Orgánica 15/1999, dicha regla no resulta aplicable a los datos referidos a la ideología de los afectados, sometidos al régimen estricto contenido en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

De este modo, sería conveniente que, una vez obtenido el consentimiento expreso y escrito de los afectados, se indicase en el lugar de su publicación en el órgano de comunicación del partido y en el sitio web desde el que pueda accederse al mismo que el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 15/1999 prohíbe el tratamiento posterior de los datos, requiriéndose para dicho tratamiento el consentimiento expreso y por escrito de los interesados, al no ser de aplicación a los datos referidos a la ideología política de las personas la excepción que habilita su tratamiento a partir de su publicación en fuentes accesibles al público.